

0027

AUTOS: “TORRES MELO, ADRIAN - PRESUNTA INFRACCION ADUANERA - EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD – ART. 232 DE LA LEY Nro.19.276” - FICHA 580 – 11/2018.

Suprema Corte de Justicia:

1) Señala el exepcionante que *“el proceso infraccional aduanero tal como está planteado por la ley 19.276 vulnera el derecho al debido proceso legal establecido en el art. 12 de nuestra Constitución dado que conforme al artículo 232 del CAROU, cuando la cuantía del asunto es inferior 40.000 UI, no es pasible una segunda instancia, violando de manera flagrante el principio del debido proceso legal preceptuado en nuestra Constitución”* (su esc., fs. 15 y 16 vto.). Asimismo, invoca la presunta transgresión del principio de igualdad consagrado en el art. 8 de la Carta, en tanto, dice, se genera una distinción *“...que pone en pie de desigualdad al compareciente frente a un ciudadano que comete un verdadero daño económico (superior a 4.000 U.I) al Estado “.*

2) Ahora bien, esta Fiscalía ha expresado en reiteradas oportunidades que la supresión de instancias o recursos no violentan el debido proceso legal, y que la Constitución Nacional no consagra una especie o modelo de proceso como aquél al que deban ceñirse las normas procesales, sino que ,por el contrario, se preceptúa en el art. 18 de la Carta que *“ Las leyes fijarán el orden y las formalidades de los juicios”.*

Esto significa que no es únicamente el procedimiento “ordinario” ni un procedimiento de múltiples instancias aquel que necesariamente ha de tenerse por respetuoso de los principios de igualdad de las partes ante la ley ni de las garantías del debido proceso, sino que para que ello se verifique basta que el legislador haya previsto que todos los litigantes tengan igualdad de oportunidades de ser oídos, de expresar sus defensas, y de tener “su día ante el tribunal”.

De hecho, la defensa que en infolios ha interpuesto la promotora es precisamente consecuencia de la oportunidad que posee no solamente de efectuar sus descargos, sino de cuestionar la regularidad constitucional del proceso en curso.

3) El cuestionamiento de las limitaciones por razones de cuantía data de tiempo atrás e incluye no solamente el régimen que impugna el excepcionante sino -acaso uno de los más típicos y representativos de ello- el régimen consagrado en materia casatoria en el Código General del Proceso (v.gr. art. 269 nral. 3), respecto del cual, y en conceptos enteramente aplicables al sublite, tanto la Corporación como esta Fiscalía han sostenido que la Carta no ampara una forma concreta de proceso o de procedimiento, y que la facultad legislativa de regular las etapas procesales prevista en su art. 18 conlleva implícita la de adaptar el proceso a la naturaleza peculiar del derecho comprometido en cada relación procesal, por lo que ni el número de etapas o formalidades, ni la supresión de recursos o instancias, justifican y fundamentan “*per se*” la pretensión de inconstitucionalidad.

4) En cuanto al derecho de igualdad, no se ha consagrado ninguna diferenciación entre partes litigantes que se encuentren en igualdad de condiciones, pues de ello se trata el respeto a aquel principio, esto es, el legislador no debe asimilar a quienes se hallan en situación diferente ni tratar desigual a quienes se encuentran en idéntica posición ante la ley.

Finalmente, cabe consignar que recientemente la Suprema Corte de Justicia ha fallado declarando la regularidad constitucional de -entre otras- la norma atacada en el sub-lite, v.gr. S.Nro. 1625 de fecha 18 de diciembre de 2018.

Por los fundamentos expuestos, esta Fiscalía estima que los agravios examinados no podrán prosperar, correspondiendo su **rechazo.-**

Montevideo, 6 de febrero de 2019.-

MA/ma/sa

Dr. Jorge Díaz Almeida
Fiscal de Corte y Procurador
General de la Nación